

Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con la siguiente modificación:

a) Se elimina el considerando TRIGÉSIMO CUARTO.

Y, se tiene, además y, en su lugar, presente:

1°.- Que, el Fisco de Chile se alza en contra de la sentencia definitiva de primera instancia que desestimó las excepciones invocadas por su parte de haber sido ya reparados los perjuicios; haber operado en la especie la prescripción; por el monto asignado en la sentencia por concepto de daño moral y, por último, respecto de la forma de calcular los intereses. Idéntico recurso intentan también los actores para enmendar la decisión, en orden a extender los efectos de la sentencia a otro demandado y también a ciertos actores; respecto del reconocimiento público y aumentos de los montos que fueron otorgados en algunos casos.

2°.- Que, primeramente, esta Corte comparte los argumentos de primera instancia para desestimar las excepciones opuestas.

En efecto, no puede estimarse suficiente la reparación simbólica que ha hecho el Estado de Chile o los beneficios que otorga el Programa PRAIS, pues se trata de reparaciones generales que no logran reparar el daño particular y propio que sufren los las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que solo puede determinarse en un juicio en el que puedan ponderarse las situaciones particulares de cada caso, de manera que procedía desechar la excepción de reparación opuesta.

3°.- Que en cuanto a la excepción de prescripción, es un hecho pacífico que el derecho internacional consagra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los de lesa humanidad prohibiéndose por la Convención de Ginebra que las partes contratantes se exoneren a sí mismas de las responsabilidades incurridas a causa de tales hechos. Así tal como ha sostenido la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en diversos fallos “no resulta coherente entender



que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental....”. (Roles 20.288-2014; 22.856-2016 entre otras). La legislación civil nacional que consagra la institución de la prescripción está referida a ilícitos comunes y jamás pensada para casos tan graves como lo son las violaciones a los derechos humanos, cuyo establecimiento se logra después de cambios político-gubernamentales y que suelen durar muchísimas décadas como la experiencia nacional demuestra.

De esta manera, los preceptos legales que invoca el Fisco de Chile como fundamento de su solicitud no resultan atinentes al encontrarse en contradicción con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que amparan el derecho de la víctima a recibir la reparación correspondiente, motivo por el cual acierta el tribunal de primera instancia al desestimar la prescripción extintiva invocada como alegación principal y la prescripción extintiva ordinaria deducida en subsidio.

4°.- Que, en cuanto al monto dinerario que se reguló por indemnización por daño moral, para lo que se adjuntaron las evidencias documentales y testimoniales a que aluden los motivos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la sentencia en alzada, que son los que permitieron acreditar como hechos, que don Manuel Jesús Arias Zúñiga, don Alamiro Santana Figueroa, don José Oscar Badillo García, don Plutarco Coussy Benavides y don Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo fueron víctimas del delito de secuestro calificado por parte de agentes del Estado de Chile, siendo todos, en consecuencia, víctimas de delitos de lesa humanidad.

Es dable, además, destacar que el demandado Fisco de Chile no contravirtió la calidad de víctimas de prisión política y tortura de los señalados ni la participación de los agentes del Estado en tales hechos, de manera que estando



acreditada la calidad referida, acertadamente, la sentencia determinó que había que estarse a los hechos expresados en la demanda, pero sólo en relación a aquellos demandantes que estableció en su parte resolutive.

5°.- Que, en este escenario, al encontrarse acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que la detención y tortura de las víctimas, que no habrían tenido lugar si la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, por lo que sólo quedó por dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en esos hechos.

6°.- Que, conforme a la prueba consignada en el motivo TRIGÉSIMO, adjuntada por los familiares de las víctimas ya mencionadas y demandantes en estos autos, se coincide por esta Corte en los montos fijados en cada caso en el fundamento TRIGÉSIMO SEGUNDO.

Lo constatado, importa, a juicio de esta Corte, afectaciones que acreditan la existencia de un daño moral, ello con los intereses que reconoce la sentenciadora, pero calculados como se dirá a continuación y en lo resolutive del presente fallo.

7°.- Que, en ese orden de ideas, como ya se anticipó, se difiere en la forma del cálculo de los intereses señalada en el fallo de primera instancia, dado que corresponden a resarcir todo retardo en el cumplimiento de una obligación cierta y líquida o liquidable y que sólo se generan desde que se incurra en retardo por parte del deudor en el pago de la obligación establecida en sentencia firme y ejecutoriada, lo que así se declarará en lo resolutive de esta sentencia.

8°.- Que, finalmente, en todo lo demás reclamado por las partes del juicio se comparten todos y cada uno de los fundamentos del fallo en análisis.

Por estas consideraciones, y conforme a lo dispuesto en el artículo 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara que:

Se **CONFIRMA** la sentencia en alzada de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol N° C-16193-2016, seguida en juicio ordinario, caratulado “Arias con Fisco de Chile”, **con declaración** de que las sumas de dinero ordenadas pagar, lo



serán con intereses corrientes para operaciones reajustables, que se generarán sólo desde que el deudor Fisco de Chile incurra en mora en el pago de ellas.

Se **Confirma**, en todo lo demás apelado, la ya singularizada sentencia.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

Rol Civil Ingreso Corte N° 7947-2020.

No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firma el abogado integrante señor Gómez, por ausencia.



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M. y Ministra Suplente Carolina Bustamante S. Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

